

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN LAS ISLAS BALEARES (pp. 1-19)

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A LES ILLES BALEARS (pp. 20-37)

JOSÉ MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ

Departament d'Urbanisme i Territori. Consell Insular de Mallorca

—

Consultor

Universitat Oberta de Catalunya

Sumario: 1. Sobre responsabilidad patrimonial y protección del territorio: las sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Palma (número 96/2015) de 30 de marzo de 2015 (número de recurso: PO 090/2012) y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma (número 201/2015) de 6 de mayo de 2015 (número de recurso: PO 154/2013). 2. Sobre la denegación por motivos ambientales de un intento de legalizar una urbanización: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (número 118/2015), de 27 de febrero de 2015 (número de recurso: PO 615/2011). 3. Sobre la correcta desclasificación de unos terrenos por motivos ambientales: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (número 154/2015) de 10 de marzo de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100158, número de recurso apelación 153/2011 - referencia juzgado PO 102/2010). 4. Sobre el régimen de tratamiento de residuos y las autorizaciones como gestor: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (número 213/2015) de 25 de marzo de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100224, núm. procedimiento 300/2012). 5. Sobre caducidad de explotaciones mineras (canteras): las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares número 012/2015, de 27 de enero de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100016, núm. procedimiento 352/20007), y número 66/2015, de 4 de febrero de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100065, núm. procedimiento 428/2007).

En este número revisaremos algunas sentencias sobre demandas de responsabilidad patrimonial derivada de actos de protección territorial. Una de ellas es realmente reciente, ya que ha llegado a nuestras manos en el momento de cerrar la edición, pero nos ha parecido oportuno incluirla en el apartado donde ya comentábamos un caso similar, ya que la interpretación de la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en esta cuestión marca una tendencia muy interesante. Por otro lado, analizaremos un caso de intento de legalización de una urbanización por una vía indirecta, cuando esta posibilidad ya había sido cerrada por motivos ambientales, así como un caso de desclasificación correcta de unos terrenos por sus valores especiales. En tercer lugar, abordaremos una sentencia en materia de residuos ante la situación de monopolio de facto que existe en la isla de Mallorca en algunos ámbitos materiales del tratamiento de determinadas fracciones. Finalmente, hemos seleccionado dos sentencias en materia de actividades extractivas con relación a la extinción de derechos mineros.

1. Sobre responsabilidad patrimonial y protección del territorio: las sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Palma (número 96/2015) de 30 de marzo de 2015 (número de recurso: PO 090/2012) y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma (número 201/2015) de 6 de mayo de 2015 (número de recurso: PO 154/2013)

Con respecto a la Sentencia número 96/2015, de 30 de marzo, estamos hablando de una reclamación de responsabilidad patrimonial como consecuencia de una mayor protección territorial derivada de la modificación número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca. El acto recurrido es la desestimación presunta de la reclamación de

responsabilidad patrimonial formulada por la entidad recurrente en fecha 11 de julio de 2011 como consecuencia de la supresión del Área de Reconversión Territorial (ART) 10.6 del Plan Territorial Insular de Mallorca operada por la modificación número 2 del Plan. El recurrente era la empresa DABNEY, S.L.U. La resolución judicial desestima el recurso y libera al Consell Insular de pagar la indemnización reclamada de 77.947.177 euros.

La resolución se motiva por el hecho de que no se había patrimonializado ni consolidado ningún derecho urbanístico indemnizable. Se considera que la delimitación de unas ART en el Plan no genera derechos urbanísticos al tratarse de una simple previsión de primer grado que requiere un largo proceso de operaciones posteriores, futuribles e inciertas. El Juzgado llega a la conclusión de que no se pueden valorar las simples expectativas aleatorias, no incorporadas ni patrimonializadas.

A los efectos de lo que nos interesa comentar aquí, destacaremos que la Sentencia examina el precepto siguiente: el artículo 139 de la Ley 30/1992 en relación con el artículo 35.1.a) del texto refundido de la Ley del Suelo de 2008, que dispone lo siguiente:

Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos:

a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración

Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incurso en dicha situación durante su vida útil.

A este respecto, la jurisprudencia (por todas, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2010, recurso núm. 154/2008) señala:

La quiebra del principio de confianza legítima se muestra como el eje sobre el que gira el examen de las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar si hay o no justificación para soportar el daño causado ilícitamente.

Aquella regulación muestra de forma clara que un requisito ineludible para la prosperabilidad de la pretensión es que el particular “no tenga el deber jurídico de soportar” la lesión producida por la aplicación del acto legislativo. Tal condición vuelve a reproducirse como exigible en el art. 141.1. LRJAPAC al establecer que “sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

[...]

Se puso de relieve en el fundamento 4.º que la entrada en juego de responsabilidad patrimonial por actos legislativos en el ámbito urbanístico exige la previa existencia de derechos consolidados por aplicación de un criterio similar al establecido en la Ley del Suelo de 1976 respecto a responsabilidad por cambio de planeamiento.

Pues bien, en esta sentencia, el Juez afirma lo siguiente:

Nuestro sistema ha funcionado y funciona, bajo la exigencia de la patrimonialización o consolidación de los derechos urbanísticos para que pueda generarse alguna pretensión indemnizatoria derivada de responsabilidad patrimonial de la administración.

Pues bien en el caso de autos, no ha habido consolidación de derechos urbanísticos, pues, como señala la Administración demandada, la delimitación de una ART por sí sola no genera ningún derecho urbanístico al tratarse de una mera previsión de primer grado. En efecto, la inclusión de un área de reconversión en el PTM no otorga la seguridad de que dicha área se ejecutará, ya que existen numerosos factores que se interponen entre la delimitación del PTM y su efectiva implantación, como la adaptación e incorporación de la ART al planeamiento municipal con las calificaciones urbanísticas que deriven y redacción ulterior de los instrumentos de ejecución urbanística que detallen el reparto de beneficios y cargas y exacta ubicación de los aprovechamientos urbanísticos.

La Sentencia es interesante porque entra en el fondo y no obliga a resolver expresamente la reclamación iniciando el correspondiente procedimiento de nuevo. Igualmente, consolida una tendencia jurisprudencial marcada por las sentencias del TSJIB de 11 de abril de 2007 y de 26 de marzo de 2014, y es importante porque existen otros procedimientos en tramitación de características similares en el mismo juzgado.

Con respecto a la Sentencia 201/2015, de 6 de mayo, llegada en el momento de cerrar esta edición, se trata de un pleito por la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los recurrentes en fecha 23 de septiembre de 2011 como consecuencia de la supresión del Área de Reconversión Territorial (ART) 10.9, zona 1, del Plan Territorial Insular de Mallorca, operada por la modificación

número 2 del Plan. La resolución adopta la línea de la examinada anteriormente a pesar de tratarse de juzgados diferentes.

Con respecto al contenido sucinto de la resolución judicial, esta desestima el recurso y libera al Consell de Mallorca de pagar la indemnización reclamada de 347.907,91 euros (más intereses y costas).

La resolución se motiva por el hecho de que no se había patrimonializado ni consolidado ningún derecho urbanístico indemnizable por la falta de los requisitos exigidos legalmente. Se considera que la delimitación de unas ART en el Plan no genera ningún derecho urbanístico al tratarse de una simple previsión de primer grado que requiere un largo proceso de operaciones posteriores, futuribles e inciertas. Igualmente, reitera el Juzgado, no se pueden valorar las simples expectativas aleatorias, no incorporadas ni patrimonializadas.

En materia de responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico, es necesaria la concurrencia de un supuesto tipificado en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2008, así como de los requisitos generales de la figura de la responsabilidad patrimonial previstos en la legislación general. Dicho de otra manera, la posible responsabilidad patrimonial que pueda generarse en el ámbito urbanístico está condicionada a la concurrencia con carácter acumulativo, por una parte, del supuesto expresamente tipificado en la legislación urbanística (en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2008) y, por otra, de los requisitos generales previstos en la legislación administrativa general (artículos 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). En este sentido, junto con la existencia de una modificación o revisión del planeamiento que haya reducido el aprovechamiento urbanístico en los términos previstos en el artículo 41.1 de la Ley 6/1998, también tienen que concurrir los siguientes requisitos:

1º) Una lesión sufrida por el particular en cualquiera de sus bienes o derechos, entendiéndose por lesión un daño antijurídico que reúna los caracteres de efectividad, posibilidad de evaluación económica e individualización con relación a una persona o grupo de personas, en donde el afectado no tenga el deber jurídico de soportarlo. Del juego de los artículos 141.1 y 139.2 de la Ley 30/1992 se deduce que el daño ha de reunir, a su vez, los siguientes requisitos:

a) El daño ha de ser efectivo, lo que excluye los daños eventuales o simplemente posibles pero no actuales, aunque hubieran sido ya reparados por un seguro privado (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de diciembre de 1982) o por la Seguridad Social (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1985).

b) El daño ha de ser evaluable económicamente, pudiendo incluirse en los mismos tanto los daños materiales como los morales (Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1975, 2 y 18 de febrero de 1980, 18 de enero y 30 de marzo de 1982, 3 y 9 de abril, 31 de mayo y 19 de noviembre de 1985, entre otras muchas).

c) El daño ha de ser individualizado, es decir, debe ser concreto, residenciable directamente en el patrimonio del reclamante y que exceda, además, de lo que puedan considerarse cargas comunes de la vida social.

2º) El daño o la lesión debe ser imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y no trate de un supuesto de fuerza mayor. Por lo tanto los elementos necesarios en este requisito son los siguientes:

a) Que la lesión sea imputable a la Administración, admitiéndose también como tal la causada por cualquier persona integrada en la organización administrativa, siempre que no sea una actividad desconectada totalmente con el servicio público.

b) Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. El funcionamiento normal permite la imputación de los daños resultantes del riesgo generado por la actuación administrativa. Se trata de daños eventuales o incidentales causados por acciones lícitas de la Administración que debe soportar, así tanto los beneficios como los perjuicios de su actuación (*cuius commoda eius te incommoda*). Por el contrario, el funcionamiento anormal del servicio supone la posibilidad de imputación de los daños causados con dolo, culpa o ilegalidad, tanto si son atribuibles a un agente identificado como si son daños anónimos, atribuibles a la organización administrativa en abstracto. Aquí se incluyen, tanto los casos en los que el servicio ha funcionado mal o defectuosamente (*culpa in committendo*, con un rendimiento por debajo de los niveles medios de prestaciones exigibles en cada servicio), como los casos en que no ha funcionado (*culpa in ommittendo*, cuando existe un deber actuar).

c) Que no se trate de un supuesto de fuerza mayor, es decir, de un acontecimiento realmente insólito y extraño al campo normal de previsiones típicas de cada actividad o servicio, según su naturaleza. Por el contrario, se califica como caso fortuito los acontecimientos o hechos imprevisibles pero insertos en el funcionamiento interno de cada actividad o servicio, según su naturaleza. La fuerza mayor es una causa no solo

irresistible, sino sobre todo extraña y ajena al funcionamiento del servicio. Se trata de “un acontecimiento exterior o inesperado, imprevisible o irresistible” (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1974 y 3 de noviembre de 1975); “de un acontecimiento que aparte de ser ordinariamente imprevisible y siempre inevitable, exceda de los riesgos propios de la empresa” (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1984); o de un “suceso que esté fuera del círculo de actuación obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable” (Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1988).

3º) La existencia de una relación de causalidad entre la acción u omisión de la Administración y el daño o lesión sufrida por un particular en sus intereses.

Estos requisitos se han conectado por parte del Juzgado con una serie de circunstancias que marcan decisivamente la resolución:

A la vista de lo expuesto hay que indicar que hasta la patrimonialización del aprovechamiento urbanístico, sólo existen meras expectativas que no forman parte del contenido del derecho de propiedad, y que por ello no son indemnizables. Para que opere el sistema de responsabilidad patrimonial en materia urbanística como consecuencia de un cambio de la ordenación urbanística, es necesario que concurran acumulativamente tres requisitos:

- 1) En primer lugar, que se hubiere producido la patrimonialización del aprovechamiento urbanístico como consecuencia del cumplimiento de las cargas y deberes impuestos en la propiedad.
- 2) En segundo lugar, que el cumplimiento de tales cargas y deberes se hubiere producido dentro de los plazos establecidos para la ejecución del programa (o que no se hubieran podido ejercitar por incumplimiento de los plazos por causas imputables a la Administración).
- 3) En tercer lugar, que se cumplan los demás requisitos generales establecidos en los artículos 139 al 146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Procede, por lo tanto la desestimación del presente recurso.

Es evidente que esta nueva sentencia, que es mucho más extensa que la anterior, es igualmente interesante porque también entra en el fondo y resuelve la reclamación. Además, esta resolución se añade a la del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de 30 de marzo de 2015 (antes comentada) y contribuye a consolidar una tendencia jurisprudencial marcada por las señaladas sentencias del TSJIB de 11 de abril de 2007 y de 26 de marzo de 2014. Igualmente, y como comentábamos con relación a la Sentencia

96/2015 del JCA 1, también es importante porque existen otros procedimientos de reclamación patrimonial por cuantías significativas y de características similares que se tramitan en los tres juzgados de lo contencioso-administrativo de Palma.

2. Sobre la denegación por motivos ambientales de un intento de legalizar una urbanización: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (número 118/2015) de 27 de febrero de 2015 (número de recurso: PO 615/2011)

El objeto de este contencioso es la impugnación de un acuerdo de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio del Consell Insular de Ibiza que aprueba definitivamente la revisión del Planeamiento General de Sant Joan de Labritja mediante Normas Subsidiarias de planeamiento. Más concretamente, la mercantil recurrente impugna el Acuerdo de la Comisión de 29 de abril de 2011 (publicado en el BOIB, núm. 104, de 7 de julio de 2011), que aprobó definitivamente la revisión de las NNSS de planeamiento de Sant Joan de Labritja, en lo relativo a la ordenación, delimitación y regulación de los núcleos rurales incluidos en las áreas de asentamiento de interés paisajístico (AAPI) afectados por la red Natura 2000, en concreto el denominado Na Xemena. La mercantil recurrente lo hace legitimada en su condición de titular de diversas parcelas incluidas en este ámbito territorial.

Explica la parte actora que sobre estos terrenos existen los siguientes instrumentos urbanísticos aprobados: 1.º) Plan Parcial del Polígono 3 del ámbito de Na Xemena, aprobado por Acuerdo de 2 de septiembre de 1980 de la Sección Insular de Ibiza y Formentera de la Comisión Provincial de Urbanismo; 2.º) proyecto de urbanización aprobado por silencio positivo.

Por el contrario, ni la Administración insular demandada ni el Ayuntamiento de Sant Joan consideran que estos terrenos tengan proyecto de urbanización aprobado, recordando que el PTIEF ya señalaba que Na Xemena carecía de proyecto de urbanización aprobado y que este planeamiento territorial exigía que en la adaptación del planeamiento general a este instrumento superior los terrenos de Na Xemena tenían que incorporarse como núcleo rural, lo que en la revisión de las NNSS aprobadas se ha hecho respecto a aquellos terrenos que, por su consolidación, así lo merecían, manteniendo el resto la clasificación de suelo rústico. Las demandadas rechazan cada

uno de los argumentos expuestos y las causas de impugnación planteadas, solicitando la confirmación del acto impugnado.

Como es sabido, la potestad administrativa de planeamiento urbanístico es fundamentalmente discrecional. A la Administración le corresponde, atendiendo a la evolución social y el desarrollo económico de la ciudadanía, adoptar el modelo territorial y urbanístico sobre el cual tiene que asentarse la población de su territorio. Esta decisión obviamente se asienta sobre la potestad discrecional que se le reconoce a estos efectos, lo cual no exime de control jurisdiccional a esta decisión, control que se realiza tanto sobre los hechos determinantes que motivan la actuación como sobre la decisión adoptada, examinándose si el resultado guarda coherencia y racionalidad con el presupuesto fáctico del cual se parte, de forma que, en caso de que así no ocurriera, se concluye que la actuación resultante es contraria a la legalidad por incidir en supuesto de arbitrariedad, infringiéndose lo que se dispone en el artículo 9 de la CE, por lo que debe rechazarse la discrecionalidad que se convierte en causa de decisiones desprovistas de justificación fáctica alguna.

Sobre esta base, el Tribunal afirma que no se considera probada la aprobación del proyecto de urbanización, elemento básico para considerar un determinado grado de consolidación del carácter de urbano de los terrenos objeto de litigio. De hecho, concluye que no se puede admitir que hubiera operado el silencio positivo.

A continuación, el Tribunal debate sobre el examen del argumento de la nulidad de pleno derecho del Acuerdo impugnado a causa de la omisión del trámite preceptivo y previo previsto en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva de Hábitats, sobre la evaluación de afectaciones y el estudio de repercusiones en los lugares afectados por la red Natura 2000. Dice el Tribunal que este argumento ya fue rebatido y analizado en la Sentencia núm. 551/2014, de 10 de noviembre, por lo que se remite a ella, donde se concluye:

En ningún momento se menciona en el informe de repercusiones preceptivo que una delimitación física más amplia de estos dos núcleos rurales, incluyendo los terrenos no edificadas pero con servicios, también sería respetuosa con los fines de protección ambiental. Pero ello no produce que el informe sea insuficiente o inadecuado en cuanto al análisis de las repercusiones, sino que de forma implícita considera como negativo para la protección de los LIC de “Costa dels Amunts” y “Els Amunts” otorgar una mayor extensión a los núcleos rurales mencionados.

Por ello, no se aprecia que en la tramitación de elaboración del instrumento de planeamiento impugnado se haya omitido trámite alguno ni tampoco se hayan infringido las reglas esenciales del procedimiento, sino que la asociación actora trata de incluir su disconformidad con el contenido y conclusiones de tales informes en supuestos vicios procedimentales, los cuales esta Sala considera que no se han cometido, debiendo desestimarse el recurso en este punto.

Más adelante, el Tribunal considera que el siguiente punto a tratar son la delimitación y ordenación de las NNSS de Sant Joan en cuanto al núcleo rural de Na Xemena, que, según la parte, resultan arbitrarias y conculcan el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El motivo de esta arbitrariedad la fundamenta la actora en que no es conforme a derecho haber excluido de la delimitación del núcleo rural los terrenos no consolidados por la edificación, que es exactamente lo que la Administración ha hecho. La aprobación efectuada resulta, en su opinión, artificiosa, ya que delimita parcelas o enclaves dispersos, aislados entre sí, fraccionando el vial existente sin que este tenga sucesión de continuidad.

La Sentencia afirma:

En definitiva, la zona de Na Xemena es un lugar de alto interés paisajístico y por ello digno de una muy alta protección, cuyos asentamientos ya existentes, esto es, suelos consolidados ya edificados sin la cobertura de un proyecto de urbanización aprobado, han de ser regulados por el planeamiento general conforme indicaba el PTI, a través de la figura del núcleo rural, de forma que, al fin, no constituye una arbitrariedad que los suelos de esa zona que no han sido todavía objeto de edificación, queden fuera de la delimitación perimetral del núcleo rural, porque precisamente la función de esa figura es dotar de servicios o infraestructura básica a aquellos asentamientos ya existentes, pero no ha de servir para permitir nuevos asentamientos en ese suelo, porque lo que se quiere es preservarlo del fenómeno urbanizador y evitar su total transformación, dadas las condiciones de alto valor ecológico y paisajístico que tiene. Una interpretación distinta a la expuesta comportaría que a través del núcleo rural sería posible ejecutar verdaderas urbanizaciones en suelo rústico, y ello es contrario a la lógica y al ordenamiento jurídico.

A continuación señala la Sentencia:

No mejor suerte ha de correr la pretendida vulneración del principio de jerarquía normativa. Nos dice la recurrente que el PTI no desclasificó ese suelo y que ordenó que el planeamiento municipal los regulara a través de la figura del núcleo rural. Pues bien, ninguna vulneración de ese principio resulta de todo lo actuado. La Norma 45 del PTI y el

punto 4.1 del Anejo 1 de ese mismo planeamiento ordena a los Ayuntamientos que en su planeamiento general ese suelo tenga la calificación de núcleo rural impedido de desarrollo urbano y con conservación del estado en que se encontraba. El PTI pretendía evitar la total transformación de ese suelo pues si solamente debían formar parte de esos núcleos rurales los terrenos consolidados por la edificación y la transformación, tal y como advierte el informe de la CBMA de 11 de marzo de 2005 se estaba pensando conservar aquellos otros que estaban todavía por edificar. Es inútil ahora impugnar lo que el planeamiento municipal acata y respeta cuando delimita el núcleo rural de Na Xemena a los terrenos ya edificados en aras de la vinculación que ese planeamiento general tiene en relación con el Plan Territorial.

En el fundamento de derecho octavo, el Tribunal afirma:

Por último queda pendiente la pretensión subsidiaria consistente en que se declare la obligación de las Administraciones intervinientes de instar los procedimientos de responsabilidad patrimonial que derivan de la desclasificación de los suelos no delimitados que se encuentran consolidados por la urbanización para la fijación de las indemnizaciones que correspondan a los propietarios afectados. La parte sostiene que al haber quedado excluidas las parcelas de las que es propietaria del perímetro de núcleo rural se le priva todo aprovechamiento urbanístico y ello ha de ser objeto de indemnización conforme al artículo 35 del RD Legislativo 2/2008.

Como dijimos en Sentencia nº 552/2014 de 10 de noviembre también a propósito de la regulación de las NNSS de Sant Joan de Labritja y en particular de los núcleos de Na Xemena y S'Illa Blanca “esta pretensión indemnizatoria no es la que se deriva de la anulación del acuerdo impugnado y que sí podríamos valorar en aplicación del artículo 31.2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LPAC), sino precisamente la consecuente a la desestimación del recurso y validación de la desclasificación.

En este punto, la pretensión indemnizatoria autónoma no puede ser atendida en este mismo recurso como reiteran las sentencias del Tribunal Supremo de 8 y 15 de junio de 2009 y 23 de julio de 2009.

En consecuencia, una vez firme esta sentencia, se abrirá plazo para una eventual reclamación en aplicación de la Ley de Suelo/2008”.

Llegados a este punto cumple desestimar íntegramente el recurso contencioso en su pedimento principal y subsidiario.

3. Sobre la correcta desclasificación de unos terrenos por motivos ambientales: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (número 154/2015) de 10 de marzo de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100158, número de recurso apelación 153/2011 - referencia juzgado PO 102/2010)

Constituye el objeto del recurso la Resolución de la Presidencia del Consell Insular de Mallorca, de 15 de marzo de 2010, por la que se desestimaba el recurso de alzada presentado contra la Resolución de la Consejera Ejecutiva de Territorio, de 5 octubre de 2009, por la que se inadmite a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 10 de julio de 2008.

La Sentencia número 149 de 2014, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Palma de Mallorca, en las actuaciones seguidas por el procedimiento ordinario, las cuales motivan la apelación, estimó parcialmente el recurso, en concreto reconociendo el derecho de los dos demandantes al hecho de que la Administración demandada les abonara la cantidad de 123.709,90 euros más los intereses legales desde el 10 de julio de 2008.

Los antecedentes de la controversia los podemos buscar en el Acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca de 2 de noviembre de 1998. En esta resolución la Administración ahora apelante, sobre la base de lo que se dispone en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, suspendió la vigencia del planeamiento para su revisión —lo que comportó la suspensión del otorgamiento de licencias—, en lo que al caso importa, en Artà, en concreto en el polígono 2A, a nivel del sector 22 de S'Estanyol. Con posterioridad, el 18 de octubre de 1999 el Pleno del Consell Insular de Mallorca aprobó definitivamente las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento.

Dice el Tribunal que por la Sentencia núm. 932/2002, de 13 de noviembre, siguiendo la doctrina de la Sala (expresada, por todas, en las sentencias de 6 de marzo, 26 y 30 de octubre de 2001 y en la Sentencia de 12 de noviembre de 2002, número 924/2012), anuló la suspensión por considerar que el Consell carecía de competencia para hacerlo. Esta sentencia fue confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2007.

Casi un año después de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2007, en concreto el 10 de julio de 2008, los ahora apelados formularon reclamación de

responsabilidad patrimonial —10.250.416,71 euros, de los cuales 123.709,90 correspondían a gastos de urbanización— por considerar que la anulación de la suspensión comportaba también la del Acuerdo de 18 de octubre de 1999 y que fue luego el Plan Territorial Insular de 2004 el que desclasificaría los terrenos del caso — 24.622 m², situados en zona de primera línea de costa, que pasaron a ser suelo rústico protegido, APT de costas—, reflejándose de la misma manera en la revisión de las Normas Subsidiarias de Artà (para adaptarse al Plan Territorial), cuya aprobación definitiva se publicó en el BOIB de 17 de junio de 2010.

Esta reclamación no fue admitida a trámite, de forma que se desestimó el recurso de alzada formulado contra su no admisión, quedando de esta manera agotada la vía administrativa.

Pues bien, planteada la controversia en sede jurisdiccional, el Juzgado núm. 1 estimó parcialmente el recurso, en concreto no para que se tramitara en sede administrativa la reclamación —previamente no admitida—, sino llegando incluso a reconocer en la Sentencia el derecho a que la Administración abone a los reclamantes una indemnización consistente precisamente en los gastos de urbanización que ellos mismos decían haber tenido —que, como ya hemos visto, fijaron en 123.709,90 euros— más los intereses legales desde el 10 de julio de 2008.

La cuestión estriba, pues, en que, considerándose por los ahora apelados que se disponía de Plan Parcial y que también se disponía de Proyecto de Urbanización cuando operó la suspensión acordada el 2 de noviembre de 1998, actualmente se esgrime que tienen derecho a ser indemnizados, ya que esta suspensión fue una decisión ilegal —por haberse adoptado por una administración incompetente— y sin ella podrían haberse proseguido actuaciones urbanizadoras hasta que se desclasificaron los terrenos por el Plan Territorial Insular en 2004.

Con todo, para los terrenos en cuestión no cabía la tramitación de plan parcial ni de proyecto de urbanización dado que se habían incumplido los plazos previstos en el mencionado plan parcial, por lo que se trataba de un caso de los contemplados en el artículo 1 de la Ley de la CAIB 6/1998.

Con este ineludible punto de partida, debe señalarse en primer lugar que la desclasificación de los terrenos de los ahora apelados no se operó por el Plan Territorial de 2004, sino que se había producido algunos años antes, en concreto mediante la Ley

CAIB 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial, en vigor desde el 18 de abril de 1999, que afectó directamente a estos terrenos de los apelados —que eran terrenos clasificados entonces como suelo urbanizable—, comprendidos en el sector 22 del polígono 2A de Artà, y que quedaron clasificados ya automáticamente como suelo rústico protegido, en concreto por encontrarse incluidos en el supuesto previsto en el apartado 2.b) de la disposición adicional duodécima de la Ley CAIB 6/1999, en relación con el artículo 19.1.i).1 de esta.

El Tribunal considera que no había lugar a tramitar un plan parcial ni un proyecto de urbanización desde la entrada en vigor de la Ley de la CAIB 6/1998, ni que tampoco hacía falta considerar que, al entrar en vigor la señalada ley, tuviera que entenderse que el Proyecto de Urbanización en que se basan los ahora apelados fuera válido y subsistente.

Puestas así las cosas, esto es, operada la desclasificación de los terrenos de los ahora apelados por la Ley CAIB 6/1999, independientemente incluso de los posibles efectos que previamente hubiera de considerarse que acaso directamente desarrolló la Ley CAIB 6/1998 e independientemente también de que la suspensión acordada el 2 de noviembre de 1998 no fue declarada nula por la sentencia de la Sala nº 932/2002 sino anulada, en definitiva, si por todo ello hubiera de considerarse que cupo reclamar hasta un año después de que se confirmase la sentencia de la Sala nº 932/2002, esto es, si es que fue temporánea la reclamación y hubiera debido ser admitida a trámite, lo que no cabe ninguna duda es que debería haber sido desestimada puesto que, con independencia de que hubiera sido anulada la suspensión acordada el 2 de noviembre de 1998, no cabe olvidar, primero, que no de toda anulación de un acto se desprende ineludiblemente el derecho a la indemnización; segundo, que en el caso la indemnización se debería medir temporalmente, como máximo, hasta la entrada en vigor de la Ley CAIB 6/1999, respecto de cuya desclasificación no consta que se reclamase por los afectados en momento alguno; y, tercero, que el hipotético derecho a la indemnización no cabía ni incluso si acaso considerásemos que quedó abierta una “ventana temporal” para reclamar esa posible indemnización, en concreto durante el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 1998 y el 18 de abril de 1999, y ello por cuanto que, refiriéndonos a lo que ahora nos cabe referirnos, es decir, a los gastos de urbanización, que es lo único que ha reconocido la sentencia apelada y lo único, pues, que se cuestiona en esta apelación promovida en exclusiva por el Consell Insular de Mallorca, ocurre que, como ya hemos señalado, la ejecución se había incumplido al haberse agotado ya previamente las etapas

previstas en los instrumentos sobre cuya supuesta subsistencia se ha venido sustentando en todo momento la tesis de los ahora apelados.

En consecuencia, inadmitida a trámite la reclamación formulada el 10 de julio de 2008, pero basada la sentencia aquí apelada no ya en que debería haber sido admitida y resuelta en cuanto al fondo esa reclamación en sede administrativa sino más precisamente en que debió resolverse por la Administración concernida estimándola parcialmente, como así la ha estimado la sentencia apelada, al fin, lo que nos cabe concluir es que debemos revocar esa sentencia ya que si es que la reclamación no era extemporánea y que, por tanto, no merecía haberse inadmitido a trámite en sede administrativa, desde luego, de acuerdo con lo que acabamos de explicar, sí que merecía ser desestimada, de modo que el recurso contencioso-administrativo promovido por los ahora apelados debió haber sido, pues, desestimado y, en consecuencia, es inútil ya elucubrar ya sobre si los gastos a que se refiere la sentencia apelada se produjeron realmente o no y, en su caso, cuándo.

Llegados a este punto, cumple la estimación de la apelación.

El Tribunal estimó el recurso de apelación y revocó la Sentencia número 149/2014 del JCA núm. 1 de Palma, desestimando el recurso contencioso interpuesto en su día por las partes reclamantes de la indemnización y confirmando las resoluciones de la Administración.

4. Sobre el régimen de tratamiento de residuos y las autorizaciones como gestor: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (número 213/2015) de 25 de marzo de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100224, núm. procedimiento 300/2012)

En el número anterior de la RCDA revisamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares núm. 350/2014, de 19 de junio de 2014, sobre la gestión y el transporte de residuos. Ahora el mismo Tribunal se ha pronunciado en una nueva sentencia sobre un recurso relacionado con el anteriormente mencionado, en el PO 300/2012.

El objeto del recurso es la resolución, primero presunta y después expresada en la Resolución adoptada el 14 de enero de 2013 por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, que estima en parte el recurso de alzada formulado por la asociación AMBILAMP contra la Resolución del Director General de Cambio Climático y Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad del

Govern de les Illes Balears, de fecha 24 de marzo de 2011, por medio de la cual se autorizaba a la indicada asociación como entidad gestora de un sistema integrado de gestión (SIG) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el ámbito territorial de las Islas Baleares, señalando una serie de condicionantes y requisitos. También se recurrió contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 28 de enero de 2013, de la Directora General de Medio Natural, Cambio Climático y Educación Ambiental, por la que se acordó ampliar la autorización antes mencionada a todos los RAEE de la categoría 5 del RD 208/2005 con los mismos condicionantes de las resoluciones anteriores.

La asociación AMBILAMP tiene la condición de entidad sin ánimo de lucro que se encuentra actualmente autorizada para operar como sistema integrado de gestión (SIG) de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el ámbito territorial de las Islas Baleares.

Esta autorización fue solicitada por la actora el 15 de septiembre de 2005 a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en aplicación de lo previsto en el RD 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, siéndole otorgada en la Resolución dictada el 24 de marzo de 2011 por el Director General de Cambio Climático y Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad del Govern de les Illes Balears.

No obstante, disconforme con algunas de las condiciones impuestas en la autorización, el actor interpuso recurso de alzada, que fue estimado en parte por medio de la primera resolución aquí recurrida, es decir, la Resolución adoptada el 14 de enero de 2013 por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, que estima en parte el recurso de alzada formulado por la asociación AMBILAMP contra la Resolución del Director General de Cambio Climático y Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad del Govern de les Illes Balears, de fecha 24 de marzo de 2011, por medio de la que se autorizaba a la indicada asociación como entidad gestora de un sistema integrado de gestión (SIG) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el ámbito territorial de las Islas Baleares, señalando una serie de condicionantes y requisitos.

Con posterioridad, la misma asociación solicitó ampliación de la autorización inicial “a todos los RAEE de la categoría 5 del RD 208/2005”, siéndole otorgada la autorización pero con los mismos condicionantes que la anterior, razón por la que se interpuso

recurso de alzada y se amplió el presente contencioso-administrativo contra su desestimación presunta.

En definitiva, AMBILAMP impugna una serie de requisitos y condicionantes impuestos en las resoluciones de autorización como SIG (tanto la inicial como su ampliación). Estos condicionantes atacan las posiciones dominantes (o de monopolio) existentes en la práctica en Mallorca en materia de tratamiento de residuos y la posibilidad de trasladar los residuos fuera de la Comunidad Autónoma. La recurrente considera que la existencia de un concesionario público que lleva a cabo el tratamiento de residuos en el territorio balear no comporta un monopolio de derecho que impida trasladar los residuos a otra comunidad autónoma.

Pues bien, la autorización concedida a AMBILAMP por la Comunidad Autónoma, en concreto los puntos 2 y 3 del apartado quinto, impone a la entidad autorizada que la entrega de los RAEE recogidos y transportados desde los centros de recogida capilar municipales o desde los distribuidores en la isla de Mallorca se efectúe necesariamente en el concesionario existente, así como que el tratamiento de estos residuos se realice a nivel de las Islas Baleares, dándose la circunstancia de que la única planta existente en todo el territorio balear se sitúa en Mallorca y se gestiona indirectamente por parte de Mac Insular, S. L.

El principio de proximidad recogido en la Ley de Residuos de 1998 y en el PDS no impide por sí mismo que los residuos recogidos en un determinado territorio autonómico puedan ser trasladados a otra comunidad autónoma para su tratamiento, sino que precisarán, en su caso, la solicitud de autorización cursada por el SIG en la Comunidad Autónoma de procedencia, la cual tendrá que aceptarla o rechazarla de forma motivada. Pero, en primer lugar, no se puede impedir esta posibilidad de traslado de forma genérica e injustificada, tal como se efectúa en el acto administrativo impugnado, basado en un PDS anterior a la Directiva comunitaria específica en materia de RAEE y cuyo ámbito de aplicación se limita a la isla de Mallorca; y, en segundo, tampoco se puede imponer que el tratamiento de los RAEE se deba realizar necesariamente en las Islas Baleares.

Se trata de limitaciones que no se desprenden de la Ley de Residuos de 1998 ni tampoco del PDS mencionado, ya que tiene que interpretarse el artículo 12 iv) en el sentido de que el tratamiento de los RAEE en la isla de Mallorca solo puede corresponder al concesionario contratado por el Consell Insular, pero no que todo

tratamiento de los residuos recogidos en Mallorca (y el resto de las islas) deba realizarse por el mismo concesionario. O lo que es lo mismo, el PDS ordena la gestión y el tratamiento de los RAEE que se traten en Mallorca, pero no los que se valoren fuera ni puede impedir que se trasladen para ser tratados fuera de la isla.

Es cierto que el artículo 16.3 de la Ley de Residuos de 1998 prevé que “3. Las Comunidades Autónomas no podrán oponerse al traslado de residuos para su valorización o eliminación en otras Comunidades Autónomas, siempre y cuando estos traslados no se opongan a los objetivos marcados en sus planes autonómicos”. No obstante, la exclusividad en el tratamiento de residuos por vía concesional no puede entenderse que sea uno de los objetivos del PDS/2002, o al menos no uno de aquellos a los cuales pretende referirse el artículo 16.3 de la Ley de Residuos de 1998. No figura así en el artículo 2 (principios de actuación del Plan) ni en el artículo 3 (objetivos) del PDS. Pero el PDS/2002 sí que recoge el principio de proximidad (art. 2). Pero opera como criterio informador, lo cual no se puede traducir en un imposible traslado de residuos fuera de la Comunidad Autónoma. Esta imposibilidad se consigue mediante un plan sectorial insular por el que se obliga a la entrega de los residuos en una instalación concreta situada en la isla, lo que impide el traslado de residuos para su entrega y tratamiento en plantas situadas fuera del territorio. Así pues, la exclusividad derivada del sistema concesional impuesto por el PDS tiene que ser interpretada en el sentido de que el tratamiento de los RAEE en Mallorca se efectúe en las instalaciones del concesionario, pero eso no es argumento para impedir que puedan ser trasladados y tratados fuera del ámbito insular.

El propio artículo 2 del PDS señala como objetivo reducir tanto como sea posible el transporte de residuos, pero eso no se puede traducir, como aquí se ha hecho, en una supresión absoluta del posible transporte. A la hora de interpretar la expresión “tanto como sea posible”, hay que entender que lo que se trata de evitar, en la medida de lo posible, son los efectos medioambientales potencialmente nocivos y molestos del transporte de residuos, lo cual obliga a no generalizar y modular el principio en función de los residuos a transportar. Concretamente, si el traslado y tratamiento de los RAEE fuera de la isla no comporta perjuicio medioambiental o es mínimo en comparación con otro tipo de residuos, la aplicación del principio de proximidad se debilita.

Con respecto al resto de controversias, el Tribunal no las admite. Así, la resolución final de la Sentencia establece lo siguiente:

1º) Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo.

2º) DECLARAMOS disconforme con el ordenamiento jurídico los actos administrativos impugnados y, en su consecuencia, los ANULAMOS parcialmente en cuanto a los puntos 2 y 3 del Apartado QUINTO y en el punto 4 del Apartado SEXTO, de las autorizaciones impugnadas, confirmándolo en los restantes extremos aquí expuestos.

Los apartados anulados son los que pretendían impedir el traslado de residuos fuera de la Comunidad Autónoma sin poseer la correspondiente cobertura legal.

5. Sobre caducidad de explotaciones mineras (canteras): las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares número 012/2015, de 27 de enero de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100016, núm. procedimiento 352/20007), y número 66/2015, de 4 de febrero de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100065, núm. procedimiento 428/2007)

El objeto de los dos recursos es la Resolución de la Consejería de Comercio, Industria y Energía del Govern Balear de 14 de mayo de 2007, que confirma la Resolución de 22 de diciembre de 2006 del Director General de Industria que declaró la caducidad de la concesión directa de explotación minera de la denominada Zona Sa Torre Nova situada dentro del perímetro de la concesión directa de explotación de recursos de la sección C) de la Ley de Minas Sa Punta-Cas Canonge núm. 2255. En un caso el recurso es planteado por un grupo de afectados y en el otro por la empresa que manifestaba poseer los derechos de explotación (Hijos de Miguel Mascaró, S. A.), que en el primer pleito figuraba como codemandada.

Ambas sentencias conducen a la misma conclusión: declarar conforme a derecho la Resolución de 22 de diciembre de 2006 que declaró la caducidad de la concesión directa de explotación minera de la Zona Sa Torre Nova, situada dentro del perímetro de la concesión directa de explotación de recursos de la sección C) de la Ley de Minas Sa Punta-Cas Canonge núm. 2255.

Al respecto, hay que recordar que el Decreto 61/1999, de 28 de mayo, de aprobación definitiva de la revisión del Plan Director Sectorial de Canteras de la CAIB, tiene por objeto regular el planeamiento, la gestión y la restauración de las canteras en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de forma que se ocasione el

menor impacto medioambiental posible. Entre las medidas que a tal fin contempla, está la adaptación e incorporación de las canteras existentes a los parámetros del indicado PDSC, de forma que, de no conseguirse su incorporación, ello acarreará la declaración de caducidad de la concesión o autorización minera.

El Tribunal considera que si una de las tres canteras (Zona C Sa Torre Nova) no ha cumplido las exigencias medioambientales y no se ha incorporado al PDSC, la consecuencia es que ya no se podrá explotar por devenir ineficaz y caducado el título administrativo que permitía la explotación. Por este motivo, por el incumplimiento de las exigencias ambientales, se declara la caducidad, que ahora se considera ajustada a derecho.

Sumari: 1. Sobre responsabilitat patrimonial i protecció del territori: les sentències del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma (número 96/2015), de 30 de març de 2015 (número de recurs: PO 090/2012), i del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (número 201/2015), de 6 de maig de 2015 (número de recurs: PO 154/2013). 2. Sobre la denegació per motius ambientals d'un intent de legalitzar una urbanització: la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (número 118/2015), de 27 de febrer de 2015 (número de recurs: PO 615/2011). 3. Sobre la correcta desclassificació de terrenys per motius ambientals: la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (número 154/2015), de 10 de març de 2015 (número de recurs apel·lació 153/2011 – referència jutjat PO 102/2010). 4. Sobre el règim de tractament de residus i les autoritzacions com a gestor: la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (número 213/2015), de 25 de març de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100224, núm. procediment 300/2012). 5. Sobre caducitat d'exploracions mineres (pedreres): les sentències del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears número 012/2015, de 27 de gener de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100016, núm. procediment 352/20007), i la número 66/2015, de 4 de febrer de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100065, núm. procediment 428/2007).

En aquest número revisarem algunes sentències sobre demandes de responsabilitat patrimonial derivada d'actes de protecció territorial. Una de les quals és realment recent, ja que ha arribat a les nostres mans al moment de tancar l'edició, però ens ha semblat oportú incloure-la en l'apartat en què comentàvem un cas similar, ja que la interpretació de la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en aquesta qüestió marca una tendència molt interessant. D'altra banda, analitzarem un cas d'intent de legalització d'una urbanització per una via indirecta, quan aquesta possibilitat ja havia estat barrada per motius ambientals, i també un cas de correcta desclassificació de terrenys pels seus valors especials. En tercer lloc, abordarem una sentència pel que fa a residus davant la situació de monopoli de facto que hi ha a l'illa de Mallorca en alguns àmbits materials del tractament de determinades deixalles. Finalment hem seleccionat dues sentències sobre activitats extractives amb relació a l'extinció de drets miners.

1. Sobre responsabilitat patrimonial i protecció del territori: les sentències del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma (número 96/2015), de 30 de març de 2015 (número de recurs: PO 090/2012), i del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (número 201/2015), de 6 de maig de 2015 (número de recurs: PO 154/2013)

Pel que fa a la Sentència número 96/2015, de 30 de març, parlem d'una reclamació de responsabilitat patrimonial com a conseqüència d'una protecció territorial més gran derivada de la modificació número 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca. L'acte recorregut és la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per l'entitat recurrent en data 11 de juliol de 2011, com a conseqüència de la

supressió de l'àrea de reconversió territorial (ART) 10.6 del Pla Territorial Insular de Mallorca, operada per la modificació número 2 del Pla. La part recurrent era l'empresa DABNEY, SLU. La resolució judicial desestima el recurs i allibera el Consell Insular de pagar la indemnització reclamada de 77.947.177 euros.

La resolució es motiva pel fet que no s'havia patrimonialitzat ni consolidat cap dret urbanístic indemnitzable. Es considera que la delimitació d'ART al Pla no genera cap dret urbanístic, ja que es tracta d'una simple previsió de primer grau que requereix un llarg procés d'operacions posteriors, futuribles i incertes. El Jutjat arriba a la conclusió que no es poden valorar les simples expectatives aleatòries, no incorporades ni patrimonialitzades.

Als efectes que ens interessa comentar aquí, destacarem que la sentència examina els preceptes següents: l'article 139 de la Llei 30/1992, amb relació a l'article 35.1.a) del Text refós de la Llei del sòl de 2008, que disposa que:

Donen lloc en tot cas a dret d'indemnització les lesions en els béns i drets que resultin dels següents supòsits:

a) L'alteració de les condicions d'exercici de l'execució de la urbanització, o de les condicions de participació dels propietaris en aquesta, per canvi de l'ordenació territorial o urbanística o de l'acte o negoci de l'adjudicació de l'esmentada activitat, sempre que es produeixi abans de transcórrer els terminis previstos per al seu desenvolupament o, transcorreguts aquests, si l'execució no s'ha portat a efecte per causes imputables a l'Administració.

Les situacions de fora d'ordenació produïdes pels canvis en l'ordenació territorial o urbanística no són indemnitzables, sense perjudici que pugui ser-ho la impossibilitat d'usar i gaudir lícitament de la construcció o edificació incursa en l'esmentada situació durant la seva vida útil¹.

Referent a això, la jurisprudència (per totes, Sentència de la Sala Tercera del Tribunal Suprem de 23 de juliol de 2010, recurs núm. 154/2008) ha assenyalat que:

La fallida del principi de confiança legítima es mostra com l'eix sobre el qual gira l'examen de les circumstàncies concurrents en cada cas per determinar si hi ha o no justificació per suportar el dany causat il·lícitament.

¹La traducció catalana d'aquest precepte està extreta de la publicació del BOE (Suplement en llengua catalana) al núm.154 de dijous 26 de juny de 2008 (Secc. I. pàg. 26).

Aquella regulació mostra de forma clara que un requisit ineludible perquè pugui prosperar la pretensió és que el particular “no tingui el deure jurídic de suportar” la lesió produïda per l’aplicació de l’acte legislatiu. Tal condició torna a reproduir-se com exigible en l’art. 141.1. En establir que “només seran indemnitzables les lesions produïdes al particular provinents de danys que aquest no tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.

Es va posar en relleu en el fonament anterior que l’entrada en joc de la responsabilitat patrimonial per actes legislatius en l’àmbit urbanístic exigeix la prèvia existència de drets consolidats per aplicació d’un criteri similar a l’establert en la Llei del Sòl de 1976 respecte a responsabilitat per canvi de planejament.

Doncs bé, en aquesta sentència, el Jutge afirma:

El nostre sistema ha funcionat i funciona, sota l’exigència de la patrimonialització o consolidació dels drets urbanístics perquè es pugui generar alguna pretensió indemnitzatòria derivada de responsabilitat patrimonial de l’administració.

Doncs bé en el cas d’aquestes actuacions, no hi ha hagut consolidació de drets urbanístics, doncs, com assenyala l’Administració demandada, la delimitació d’una ART per si sola no genera cap dret urbanístic en tractar-se d’una mera previsió de primer grau. En efecte, la inclusió d’una àrea de reconversió en el PTM no atorga la seguretat que aquesta àrea s’executarà, ja que existeixen nombrosos factors que s’interposen entre la delimitació del PTM i la seva efectiva implantació, com l’adaptació i incorporació de l’ART al planejament municipal amb les qualificacions urbanístiques que derivin i redacció ulterior dels instruments d’execució urbanística que detallin el repartiment de beneficis i càrregues i exacta ubicació dels aprofitaments urbanístics.

La sentència és interessant perquè entra en el fons i no obliga a resoldre expressament la reclamació iniciant el corresponent procediment de bell nou. Igualment consolida una tendència jurisprudencial marcada per les sentències del TSJIB d’11 d’abril de 2007, de 26 de març de 2014, i és important perquè hi ha altres procediments en tràmit de característiques similars al mateix jutjat.

Pel que fa a la Sentència 201/2015, de 6 de maig, que ha arribat al moment de tancar aquesta edició, es tracta d’un plet per la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les parts recurrents en data 23 de setembre de 2011, com a conseqüència de la supressió de l’àrea de reconversió territorial (ART) 10.9, zona 1, del Pla territorial insular de Mallorca, operada per la modificació número 2

del Pla. La resolució adopta la línia de l'examinada anteriorment tot i tractar-se de jutjats diferents.

Pel que fa al contingut succint de la resolució judicial, aquesta desestima el recurs i allibera el Consell de Mallorca de pagar la indemnització reclamada de 347.907,91 euros (més interessos i costos).

La resolució es motiva pel fet que no s'havia patrimonialitzat ni consolidat cap dret urbanístic indemnitzable, per la manca dels requisits exigits legalment. Es considera que la delimitació d'ART al Pla no genera cap dret urbanístic, ja que es tracta d'una simple previsió de primer grau que requereix un seguit llarg d'operacions posteriors, futuribles i incertes. Igualment, el Jutjat reitera que no es poden valorar les simples expectatives aleatòries, no incorporades ni patrimonialitzades.

Pel que fa a responsabilitat patrimonial en l'àmbit urbanístic, cal la concurrència d'un supòsit tipificat en l'article 35 del Reial decret legislatiu 2/2008, i també dels requisits generals de la figura de: la responsabilitat patrimonial previstos en la legislació general. Dit d'una altra manera, la possible responsabilitat patrimonial que pugui generar-se en l'àmbit urbanístic està condicionada a la concurrència amb caràcter acumulatiu, d'una banda, del supòsit expressament tipificat en la legislació urbanística (en l'article 35 del Reial decret legislatiu 2/2008); i, d'altra banda, dels requisits generals previstos en la legislació administrativa general (articles del 139 a 146 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú). En aquest sentit, al costat de l'existència d'una modificació o revisió del planejament que hagi reduït l'aprofitament urbanístic en els termes previstos en l'article 41.1 de la Llei 6/1998, també han de concórrer els següents requisits:

1r) Una lesió soferta pel particular en qualsevol dels seus béns o drets, entenent per lesió un dany antijurídic que reuneixi els caràcters d'efectivitat, possibilitat d'avaluació econòmica i individualització en relació amb una persona o grup de persones, on l'afectat no tingui el deure jurídic de suportar-ho. Del joc dels articles 141.1 i 139.2 de la Llei 30/1992 es dedueix que el dany ha de reunir, al seu torn, els següents requisits:

a) El dany ha de ser efectiu, la qual cosa exclou els danys eventuais o simplement possibles però no actuals, encara que haguessin estat ja reparats per un segur privat (Sentència del Tribunal Suprem de 8 de desembre de 1982) o per la Seguretat Social (Sentència del Tribunal Suprem d'11 de febrer de 1985).

b) El dany ha de ser avaluable econòmicament, podent incloure's en els mateixos tant els danys materials com els morals (Sentències del Tribunal Suprem de 12 de març de 1975, 2 i 18 de febrer de 1980, 18 de gener i 30 de març de 1982, 3 i 9 d'abril, 31 de maig i 19 de novembre de 1985, entre moltes altres).

c) El dany ha de ser individualitzat, és a dir, ha de ser concret, ha de residir directament en el patrimoni del reclamant i que excedeixi, a més, del que puguin considerar-se càrregues comunes de la vida social.

2n) El dany o la lesió ha de ser imputable a l'Administració i conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, i no tracti d'un supòsit de força major. Per tant els elements necessaris en aquest requisit són els següents:

a) Que la lesió sigui imputable a l'Administració, admetent-se també com tal la causada per qualsevol persona integrada en l'organització administrativa, sempre que no sigui una activitat desconnectada totalment amb el servei públic.

b) Que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. El funcionament normal permet la imputació dels danys resultants del risc generat per l'actuació administrativa. Es tracta de danys eventuais o incidentals causats per accions lícites de l'Administració que ha de suportar, així tant els beneficis com els perjudicis de la seva actuació (*cuiuscommodaeius te incommoda*). Per contra, el funcionament anormal del servei suposa la possibilitat d'imputació dels danys causats amb dol, culpa o il·legalitat, tant si són atribuïbles a un agent identificat com si són danys anònims, atribuïbles a l'organització administrativa en abstracte. Aquí s'inclouen, tant els casos en els quals el servei ha funcionat dolent defectuosament (*culpa in committendo*, amb un rendiment per sota dels nivells mitjans de prestacions exigibles en cada servei), com els casos en què no ha funcionat (*culpa in ommittendo*, quan existeix un deure actuar).

c) Que no es tracti d'un supòsit de força major, és a dir, d'un esdeveniment realment insòlit i estrany al camp normal de previsions típiques de cada activitat o servei, segons la seva naturalesa. Per contra, es qualifica de cas fortuït els esdeveniments o fets imprevisibles però inserits en el funcionament intern de cada activitat o servei, segons la seva naturalesa. La força major és una causa no solament irresistible, sinó sobretot estranya i aliena al funcionament del servei. Es tracta d'"un esdeveniment exterior o inesperat, imprevisible o irresistible" (Sentència del Tribunal Suprem de 16 de novembre de 1974 i 3 de novembre de 1975); "d'un esdeveniment que a part de ser ordinàriament imprevisible i sempre inevitable, excedeixi dels riscos propis de, l'empresa" (Sentència del Tribunal Suprem de 12 de març de 1984); o d'un "succés que estigui fos del cercle

d'actuació obligat, que no hagués pogut preveure's o que previst fos inevitable'' (Sentència del Tribunal Suprem de 3 de novembre de 1988).

3r) L'existència d'una relació de causalitat entre l'acció o omissió de l'Administració i el dany o lesió soferta per un particular en els seus interessos.

Aquests requisits són connectats per part del Jutjat amb una sèrie de circumstàncies que marquen decisivament la resolució:

A la vista de l'exposat cal indicar que fins a la patrimonialització de l'aprofitament urbanístic, només existeixen meres expectatives que no formen part del contingut del dret de propietat i que per això no són indemnitzables. Perquè operi el sistema de responsabilitat patrimonial en matèria urbanística com a conseqüència d'un canvi de l'ordenació urbanística, és necessari que concorrin acumulativament tres requisits:

- 1) En primer lloc, que s'hagués produït la patrimonialització de l'aprofitament urbanístic com a conseqüència del compliment de les càrregues i deures imposats a la propietat.
- 2) En segon lloc, que el compliment, de tals càrregues i deures s'hagués produït dins dels terminis establerts per a l'execució del programa (o que no s'haguessin pogut exercitar per incompliment dels terminis per causes imputables a l'Administració).
- 3) En tercer lloc, que es compleixin els altres requisits generals establerts en els articles 139 al 146 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Procedeix, per tant la desestimació del present recurs.

És evident que aquesta nova sentència, que és molt més extensa que l'anterior, és igualment interessant perquè també entra en el fons i resol la reclamació. A més, aquesta resolució s'afegeix a la del Jutjat Contenciós número 1 de 30 de març de 2015 (abans comentada) i contribueix a consolidar una tendència jurisprudencial marcada per les assenyalades sentències del TSJIB d'11 d'abril de 2007, de 26 de març de 2014. Igualment, i com comentàvem amb relació a la Sentència 96/2015 del JCA 1, també és important perquè existeixen altres procediments de reclamació patrimonial per quanties significatives i de característiques similars, que es tramiten als tres jutjats contenciosos de Palma.

2. Sobre la denegació per motius ambientals d'un intent de legalitzar una urbanització: la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (número 118/2015), de 27 de febrer de 2015 (número de recurs: PO 615/2011)

L'objecte d'aquest contenciós és la impugnació de l'Acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa que aprova definitivament la revisió del Planejament general de Sant Joan de Labritja mitjançant Normes subsidiàries de planejament. Més concretament, impugna la mercantil recurrent l'Acord de la Comissió de 29 d'abril de 2011 (publicat en el BOIB núm. 104, de 7 de juliol de 2011) que aprovà definitivament la revisió de les NS de planejament de Sant Joan de Labritja, referent a l'ordenació, delimitació i regulació dels nuclis rurals inclosos a les "àrees d'assentament d'interès paisatgístic" (AAPI), afectats per la Xarxa Natura 2000, en concret l'anomenat "Na Xemena". La mercantil recurrent ho fa legitimat en la seva condició de titular de diverses parcel·les incloses en aquest àmbit territorial.

La part actora explica que sobre aquests terrenys existeixen els següents instruments urbanístics aprovats: 1r) Pla Parcial del Polígon 3 de l'àmbit de Na Xemena aprovat per Acord de 2 de setembre de 1980 de la Secció Insular d'Eivissa Formentera de la Comissió Provincial d'Urbanisme; 2n) projecte d'urbanització aprovat per silenci positiu.

Per contra, ni l'Administració insular demandada ni l'Ajuntament de Sant Joan consideren que aquests terrenys tenen cap projecte d'urbanització aprovat, i recorden que el PTIEF ja assenyalava que Na Xemena mancava de projecte d'urbanització aprovat i aquest planejament territorial exigia que en l'adaptació del planejament general a aquest instrument superior, els terrenys de Na Xemena havien d'incorporar-se com a nucli rural, la qual cosa en la revisió de les NS aprovades s'ha fet en la part de terrenys que per la seva consolidació, així ho mereixien i mantenen la classificació de sòl rústic quant a la resta. Les parts demandades rebutgen cadascun dels arguments exposats i causes d'impugnació plantejades, i sol·liciten la confirmació de l'acte impugnat.

Com és sabut, la potestat administrativa de planejament urbanístic és fonamentalment discrecional. A l'administració li correspon, atenent l'evolució social i desenvolupament econòmic de la ciutadania, adoptar el model territorial i urbanístic sobre el qual ha d'assentar-se la població del seu territori. Aquesta decisió òbviament s'assenta sobre la

potestat discrecional que se li reconeix a aquests efectes, la qual cosa no eximeix de control jurisdiccional d'aquesta decisió, control que es du a terme tant sobre els fets determinants que motiven aquesta actuació com la decisió adoptada, i s'examina si el resultat manté coherència i racionalitat amb el pressupost fàctic del qual es parteix, de manera que si no és així, es conclou que l'actuació resultant és contrària a la legalitat per incidir en supòsit d'arbitrarietat i s'infringeix el que es disposa l'article 9 de la CE, i per això ha de rebutjar-se la discrecionalitat que s'ha convertit en causa de decisions desproveïdes de justificació fàctica.

Sobre aquesta base, el Tribunal afirma, d'una banda, que no es considera provada l'aprovació del projecte d'urbanització, element bàsic per considerar un determinat grau de consolidació del caràcter d'urbà dels terrenys objecte de litigi; de fet, conclou que no es pot admetre que hagués operat el silenci positiu.

A continuació, el Tribunal debat sobre l'examen de l'argument de la nul·litat de ple dret de l'Acord impugnat a causa de l'omissió del tràmit preceptiu i previ previst en l'article 6 de la Directiva 92/43/CEE coneguda com a Directiva hàbitat sobre l'avaluació d'afeccions i estudi de repercussions en els llocs afectats per la Xarxa Natura 2000. El Tribunal diu que aquest argument ja va ser rebutjat i analitzat en la Sentència núm. 551/2014 de 10 de novembre, i per aquest motiu s'hi remet, la qual conclou:

En cap moment s'esmenta en l'informe de repercussions preceptiu que una delimitació física més àmplia d'aquests dos nuclis rurals, inclòs els terrenys no edificats però amb serveis, també seria respectuosa amb les finalitats de protecció ambiental. Però això no produeix que l'informe sigui insuficient o inadequat quant a l'anàlisi de les repercussions, sinó que de forma implícita considera com a negatiu per a la protecció dels LIC de "Costa dels Amunts" i "Els Amunts" atorgar una major extensió als nuclis rurals esmentats.

Per això, no s'aprecia que en la tramitació d'elaboració de l'instrument de planejament impugnat s'hagi omès cap tràmit ni tampoc s'hagin infringit les regles essencials del procediment, sinó que l'associació actora tracta d'incloure la seva disconformitat amb el contingut i conclusions de tals informes en suposats vicis procedimentals, els quals aquesta Sala considera que no s'han comès, havent-ne de desestimar el recurs en aquest punt.

A continuació, el Tribunal considera que el següent punt que s'ha de tractar és l'examen de la delimitació i ordenació de les NS de Sant Joan quant al nucli rural de Na Xemena, que segons la part resulta arbitrària i conculca el principi constitucional d'interdicció de

l'arbitrarietat dels poders públics. El motiu d'aquesta arbitrarietat la fonamenta la part actora que no és conforme a dret haver exclòs de la delimitació del nucli rural els terrenys no consolidats per a l'edificació, que és exactament el que l'Administració ha fet. L'aprovació efectuada resulta, al seu parer, artificiosa, ja que delimita parcel·les o enclavaments dispersos, aïllats entre si, i fracciona el viari existent sense que tingui successió de continuïtat.

La sentència afirma:

En definitiva, la zona de Na Xemena és un lloc d'alt interès paisatgístic i per això digne d'una molt alta protecció, els assentaments de la qual ja existents, això és, sòls consolidats ja edificats sense la cobertura d'un projecte d'urbanització aprovat, han de ser regulats pel planejament general segons indicava el PTI, a través de la figura del nucli rural, de manera que, per fi, no constitueix una arbitrarietat que els sòls d'aquesta zona que no han estat encara objecte d'edificació, quedin fora de la delimitació perimetral del nucli rural, perquè precisament la funció d'aquesta figura és dotar de serveis o infraestructura bàsica a aquells assentaments ja existents, però no ha de servir per permetre nous assentaments en aquest sòl, perquè el que es vol és preservar-ho del fenomen urbanitzador i evitar la seva total transformació, donades les condicions d'alt valor ecològic i paisatgístic que té. Una interpretació diferent de l'exposada comportaria que a través del nucli rural seria possible executar veritables urbanitzacions en sòl rústic, i això és contrari a la lògica i a l'ordenament jurídic.

A continuació la sentència diu:

No ha de córrer millor sort la pretesa vulneració del principi de jerarquia normativa. Ens diu la recurrent que el PTI no va desclassificar aquest sòl i que va ordenar que el planejament municipal els regulés a través de la figura del nucli rural. Doncs bé, cap vulneració d'aquest principi resulta de tot allò actuat. La Norma 45 del PTI i el punt 4.1 de l'Annex 1 d'aquest mateix planejament ordena als Ajuntaments que en el seu planejament general aquest sòl tingui la qualificació de nucli rural impedit de desenvolupament urbà i amb conservació de l'estat en què es trobava. El PTI pretenia evitar la total transformació d'aquest sòl doncs si solament havien de formar part d'aquests nuclis rurals els terrenys consolidats per l'edificació i la transformació, tal com adverteix l'informe de la CBMA d'11 de març de 2005 s'estava pensant conservar aquells altres que estaven encara per edificar. És inútil ara impugnar el que el planejament municipal acata i respecta quan delimita el nucli rural de Na Xemena als terrenys ja edificats en llaures a la vinculació que aquest planejament general té en relació al Pla Territorial.

Al fonament de dret vuitè, el tribunal afirma:

Finalment queda pendent la pretensió subsidiària consistent en què es declari l'obligació de les Administracions que intervenen, d'instar els procediments de responsabilitat patrimonial que deriven de la desclassificació dels sòls no delimitats que es troben consolidats per la urbanització per a la fixació de les indemnitzacions que corresponguin als propietaris afectats. La part sosté que en haver quedat excloses les parcel·les de les quals és propietària del perímetre de nucli rural se li priva tot aprofitament urbanístic i això ha de ser objecte d'indemnització conforme a l'article 35 del RD Legislatiu 2/2008.

Com vam dir en Sentència núm. 552/2014 de 10 de novembre també a propòsit de la regulació de les NS de Sant Joan de Labritja i en particular dels nuclis de Na Xemena i S'Illa Blanca aquesta pretensió indemnitzatòria no és la que es deriva de l'anul·lació de l'acord impugnat i que sí que podríem valorar en aplicació de l'article 31.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LPAC), sinó precisament la conseqüent a la desestimació del recurs i validació de la desclassificació.

En aquest punt, la pretensió indemnitzatòria autònoma no pot ser atesa en aquest mateix recurs com reiteren les sentències del Tribunal Suprem de 8 i 15 de juny de 2009 i 23 de juliol de 2009.

En conseqüència, una vegada ferma aquesta sentència, s'obrirà termini per a una eventual reclamació en aplicació de la Llei de Sòl/2008.

Arribats a aquest punt compleix desestimar íntegrament el recurs contenciós en la pretensió formulada principal i subsidiària.

3. Sobre la correcta desclassificació de terrenys per motius ambientals: la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (número 154/2015), de 10 de març de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100158, número de recurs apel·lació 153/2011 – referència jutjat PO 102/2010)

Constitueix l'objecte del recurs la Resolució de la Presidència del Consell Insular de Mallorca, de 15 de març de 2010, per la qual es desestimava el recurs d'alçada presentat contra la Resolució de la Consellera Executiva de Territori, de 5 octubre de 2009, per la qual s'inadmet a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 10 de juliol de 2008.

La Sentència número 149 de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, en les actuacions seguides pel procediment ordinari i les quals

motiven l'apel·lació, va estimar parcialment el recurs, en concret va reconèixer el dret de les dos parts demandants al fet que l'Administració demandada els abonés la quantitat de 123.709,90 euros, més els interessos legals des del 10 de juliol de 2008.

Els antecedents de la controvèrsia els podem buscar en l'acord del Ple Consell Insular de Mallorca de 2 de novembre de 1998. En aquesta resolució l'Administració ara apel·lant, basant-se en el que disposa l'article 51 del Text refós de la Llei del sòl de 1976, va suspendre la vigència del planejament per a la seva revisió —i va comportar la suspensió de l'atorgament de llicències—, pel que fa al cas importa, en Artà, en concret al Polígon 2A, en l'àmbit del sector 22 de S'Estanyol. Amb posterioritat, el 18 d'octubre de 1999 el Ple del Consell Insular de Mallorca va aprovar definitivament les Normes complementàries i subsidiàries de planejament.

Diu el Tribunal que per la Sentència núm. 932/2002, de 13 de novembre, seguint la doctrina de la Sala expressada (per totes, en les sentències de 6 de març, 26 i 30 d'octubre de 2001 i en la Sentència de 12 de novembre de 2002, número 924/2012), va anul·lar la suspensió perquè considerava que el Consell mancava de competència per fer-ho. Aquesta sentència va ser confirmada per la Sentència del Tribunal Suprem de 19 de juliol de 2007.

Gairebé un any després de la Sentència del Tribunal Suprem de 19 de juliol de 2007, en concret el 10 de juliol de 2008, ara les parts apel·lades van formular una reclamació de responsabilitat patrimonial —10.250.416,71 euros, dels quals 123.709,90 corresponien a despeses d'urbanització— perquè consideraven que l'anul·lació de la suspensió aparellava la de l'Acord de 18 d'octubre de 1999, i consideraven també que va ser després el Pla Territorial Insular de 2004 el que va desclassificar els terrenys del cas — 24.622 m², situats en zona de primera línia de costa, que van passar a ser sòl rústic protegit, ATP de costes—, cosa que es reflectia de la mateixa manera en la revisió de les Normes subsidiàries d'Artà (per adaptar-se al Pla Territorial), l'aprovació definitiva de les quals es va publicar en el BOIB de 17 de juny de 2010.

Aquesta reclamació no va ser admesa a tràmit, i el recurs d'alçada formulat contra aquesta no-admissió va ser desestimat. D'aquesta manera, va quedar esgotada la via administrativa.

Doncs bé, plantejada la controvèrsia en seu jurisdiccional, el Jutjat núm. 1 va estimar parcialment el recurs, en concret no perquè es tramités en seu administrativa la

reclamació —prèviament no admesa— sinó que fins i tot es va arribar a reconèixer en la sentència el dret al fet que l'Administració abonés a les parts reclamants una indemnització, consistent precisament en les despeses d'urbanització que ells mateixos deien que havien tingut —i establiren, com ja hem vist, 123.709,90 euros— més els interessos legals des del 10 de juliol de 2008.

La qüestió estrebava, doncs, que, considerant-se per ara la part apel·lada que es disposava de Pla Parcial i que també es disposava de Projecte d'Urbanització quan va operar la suspensió acordada el 2 de novembre de 1998, per fi, s'esgrimeix que tenen dret a ser indemnitzats, ja que aquesta suspensió va ser una decisió il·legal —per haver-se adoptat per una Administració incompetent— i sense la qual podrien haver-se prosseguit actuacions urbanitzadores fins que es van desclassificar els terrenys pel Pla Territorial Insular el 2004.

Amb tot, per als terrenys en qüestió no cabia la tramitació de Pla Parcial ni de Projecte d'Urbanització, ja que s'incomplien els terminis que s'hi preveien i es tractava de cas previst en l'article 1 de la Llei de la CAIB 6/1998.

Amb aquest ineludible punt de partida, cal assenyalar, en primer lloc, que la desclassificació dels terrenys de l'ara part apel·lada no es va operar pel Pla Territorial de 2004 sinó que havia tingut lloc anys abans, en concret mitjançant la Llei CAIB, 6/1999, de 3 d'abril, de directrius d'ordenació territorial, en vigor des del 18 d'abril de 1999, que va afectar directament aquests terrenys de les parts apel·lades —que eren terrenys classificats llavors com a sòl urbanitzable— compresos en el sector 22 del polígon 2-A d'Artà, i que van quedar classificats ja automàticament com a sòl rústic protegit, en concret perquè estaven inclosos en el supòsit previst a l'apartat 2.b) de la disposició addicional dotzena de la Llei CAIB 6/1999, en relació amb l'article 19.1.i).1 de la mateixa llei.

El Tribunal considera que no hi havia lloc a tramitar un pla parcial ni un projecte d'urbanització des de l'entrada en vigor de la Llei de la CAIB 6/1998 ni tampoc calia considerar que en entrar en vigor l'assenyalada llei hagués d'entendre's que el Projecte d'Urbanització en què es basen els ara les parts apel·lades fos vàlid i subsistent.

Posades així les coses, això és, operada la desclassificació dels terrenys dels ara apel·lats per la Llei CAIB 6/1999, independentment fins i tot dels possibles efectes que prèviament hagués de considerar-se que per ventura directament va desplegar la Llei CAIB 6/1998 i independentment també que la suspensió acordada el 2 de novembre de 1998 no va ser

declarada nul·la per la sentència de la Sala núm. 932/2002 sinó anul·lada, en definitiva, si per tot això hagués de considerar-se que va caldre reclamar fins un any després que es confirmés la sentència de la Sala núm. 932/2002, això és, si és que va ser temporània la reclamació i hagués hagut de ser admesa a tràmit, la qual cosa no hi ha cap dubte és que hauria d'haver estat desestimada lloc que, amb independència que s'hagués estat anul·lada la suspensió acordada el 2 de novembre de 1998, cal no oblidar, primer, que no de tota anul·lació d'un acte es desprèn ineludiblement el dret a la indemnització; segon, que en el cas la indemnització s'hauria de mesurar temporalment, com a màxim, fins a l'entrada en vigor de la Llei CAIB 6/1999, respecte de la desclassificació de la qual no consta que es reclamés pels afectats en cap moment; i, tercer, que l'hipotètic dret a la indemnització no cabia ni fins i tot si per ventura consideréssim que va quedar oberta una "finestra temporal" per reclamar aquesta possible indemnització, en concret durant el període comprès entre el 2 de novembre de 1998 i el 18 d'abril de 1999, i això perquè, referint-nos al que ara ens cal referir-nos, és a dir, a les despeses d'urbanització, que és l'única cosa que ha reconegut la sentència apel·lada i l'única cosa, doncs, que es qüestiona en aquesta apel·lació promoguda en exclusiva pel Consell Insular de Mallorca, ocorre que, com ja hem assenyalat, l'execució s'havia incomplert en haver-se esgotat ja prèviament les etapes previstes en els instruments sobre la suposada subsistència dels quals s'ha anat sustentant a tot moment la tesi dels ara apel·lats.

En conseqüència, inadmesa a tràmit la reclamació formulada el 10 de juliol de 2008, però basada la sentència aquí apel·lada no ja en què hauria d'haver estat admesa i resolta quant al fons aquesta reclamació en seu administrativa sinó més precisament en què va haver de resoldre's per l'Administració concernida estimant-la parcialment, com així l'ha estimat la sentència apel·lada, per fi, la qual cosa ens cal concloure és que hem de revocar aquesta sentència, ja que si és que la reclamació no era extemporània i que, per tant, no mereixia haver-se inadmesa a tràmit en seu administrativa, per descomptat, d'acord amb el que acabem d'explicar, sí que mereixia ser desestimada, de manera que el recurs contenciós-administratiu promogut per als ara apel·lats va haver d'haver estat, doncs, desestimat i, en conseqüència, és inútil ja elucubrar ja sobre si les despeses al fet que es refereix la sentència apel·lada es van produir realment o no i, si escau, quan.

Arribats a aquest punt, compleix l'estimació de l'apel·lació.

El tribunal va estimar el recurs d'apel·lació i va revocar la Sentència número 149/2014, del JCA núm. 1 de Palma, va desestimar el recurs contenciós interposat al seu dia per les parts reclamants de la indemnització i va confirmar les resolucions de l'Administració.

4. Sobre el règim de tractament de residus i les autoritzacions com a gestor: la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (número 213/2015), de 25 de març de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100224, núm. procediment 300/2012)

En el número anterior de la RCDA vàrem revisar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 350/2014, de 19 de juny de 2014, sobre gestió i transport de residus. Ara el mateix Tribunal s'ha pronunciat en una nova sentència, sobre un recurs relacionat amb l'esmentat anteriorment, en el PO 300/2012.

L'objecte del recurs és la resolució, primer presumpta, i després expressada en la Resolució adoptada el 14 de gener de 2013 pel conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, que estima en part el recurs d'alçada formulat per l'associació AMBILAMP contra la resolució del director general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, de data 24 de març de 2011, per la qual s'autoritzava a l'associació indicada, com a entitat gestora d'un sistema integrat de gestió (SIG) de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) en l'àmbit territorial de les Illes Balears, assenyalant una sèrie de condicionants i requisits. També es va recórrer contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra la Resolució de 28 de gener de 2013, de la directora general de Medi Natural, Canvi Climàtic i Educació Ambiental, per la qual s'acordà ampliar l'autorització abans esmentada a tots els RAEE de la categoria 5 del RD 208/2005, amb els mateixos condicionants de les resolucions anteriors.

L'associació AMBILAMP té la condició d'entitat sense ànim de lucre que es troba actualment autoritzada per operar com a sistema integrat de gestió (SIG) de residus procedents d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Aquesta autorització va ser sol·licitada per la part actora el 15 de setembre de 2005 a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en aplicació del que preveu el RD 208/2005, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, i li fou atorgada en la Resolució dictada el 24 de març de 2011 pel director general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears.

No obstant això, disconforme amb algunes de les condicions imposades en l'autorització, es va interposar recurs d'alçada, el qual va ser estimat en part per mitjà de la primera resolució aquí recorreguda, això és, la resolució adoptada el 14 de gener de 2013 pel conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, que estima en part el recurs d'alçada formulat per l'associació AMBILAMP contra la resolució del director general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, de data 24 de març de 2011, per la qual s'autoritzava a l'associació indicada, com a entitat gestora d'un sistema integrat de gestió (SIG) de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) en l'àmbit territorial de les Illes Balears, assenyalant una sèrie de condicionants i requisits.

Amb posterioritat, la mateixa associació va sol·licitar l'ampliació de l'autorització inicial "a tots els RAEE de la categoria 5 del RD 208/2005", que li fou atorgada però amb els mateixos condicionants que l'anterior, raó per la qual es va interposar un recurs d'alçada i s'amplia el present contenciós administratiu contra la seva desestimació presumpta.

En definitiva, AMBILAMP impugna una sèrie de requisits i condicionants imposats en les resolucions d'autorització com a SIG (tant la inicial com la seva ampliació). Aquests condicionants ataquen les posicions dominants (o de monopoli) existents a la pràctica a Mallorca pel que fa a tractament de residus, i la possibilitat de traslladar el residus fora de la comunitat autònoma. La part recurrent considera que l'existència d'un concessionari públic que duu a terme el tractament de residus al territori Balear no comporta un monopoli de dret que impedeixi traslladar els residus a una altra comunitat autònoma.

Doncs bé, en l'autorització concedida a AMBILAMP per la comunitat autònoma, en concret, els punts 2 i 3 de l'apartat cinquè, imposen a l'entitat autoritzada que el lliurament dels RAEE recollits i transportats des dels centres de recollida capil·lar municipals o des dels distribuïdors a l'illa de Mallorca, s'efectuï necessàriament al concessionari existent, i també que el tractament d'aquests residus es dugui a terme en l'àmbit de les Illes Balears, amb la circumstància que l'única planta existent en tot el territori balear se situa a Mallorca, i la gestiona indirectament Mac Insular, SL.

El principi de proximitat recollit en la Llei de residus de 1998 i en el PDS no impedeix per si mateix que els residus recollits en un determinat territori autonòmic puguin ser traslladats a una altra comunitat autònoma per al seu tractament, sinó que necessiten, si

escau, la sol·licitud d'autorització cursada pel SIG a la comunitat autònoma de procedència, la qual ha d'acceptar-la o rebutjar-la de forma motivada. Però, primer, ni es pot impedir aquesta possibilitat de trasllat de forma genèrica i injustificada com s'efectua en l'acte administratiu impugnat, basat en un PDS anterior a la directiva comunitària específica pel que fa a RAEE i l'àmbit de la qual d'aplicació es limita a l'illa de Mallorca; i, segon, tampoc es pot imposar que el tractament dels RAEE necessàriament s'hagi de dur a terme a les Illes Balears.

Es tracta de limitacions que no es desprenen de la Llei de residus de 1998 ni tampoc del PDS esmentat, ja que cal interpretar l'article 12 iv) en el sentit que el tractament dels RAEE a l'illa de Mallorca només pot correspondre al concessionari contractat pel Consell Insular, però no que tot tractament dels residus recollits a Mallorca (i la resta de les Illes) hagi de realitzar-se pel mateix. O el que és el mateix, el PDS ordena la gestió i el tractament dels RAEE que es tractin a Mallorca, però no els que es valorin fora ni pot impedir que es traslladin per tractar-se fora de l'illa.

És cert que l'article 16.3 de la Llei de residus de 1998 preveu que "3. Les Comunitats Autònomes no podran oposar-se al trasllat de residus per a la seva valorització o eliminació en altres Comunitats Autònomes, sempre que aquests trasllats no s'oposin als objectius marcats en els seus plans autonòmics". No obstant això, l'exclusivitat en el tractament de residus per via concessional no pot entendre's que sigui un dels objectius del PDS/2002, o almenys no un d'aquells als quals pretén referir-se l'article 16.3 de la Llei de residus de 1998. No figura així en els articles 2 (principis d'actuació del Pla) i 3 (objectius) del PDS. Però el PDS/2002 sí que recull el principi de proximitat (art.2). Però opera com a criteri informador, la qual cosa no es pot traduir en impossible trasllat de residus fora de la comunitat autònoma. Impossibilitat que s'aconsegueix si per la via d'un Pla Sectorial Insular s'obliga al lliurament dels residus en una concreta instal·lació situada a l'illa, i amb això s'impedeix el trasllat de residus per al seu lliurament i tractament en plantes situades fora del territori. En aquest sentit, l'exclusivitat derivada del sistema concessional imposat pel PDS ha de ser interpretada en el sentit que els RAEE que s'han de tractar a Mallorca, s'efectuï en les instal·lacions del concessionari, però això no és argument per impedir que puguin ser traslladats i tractats fora de l'àmbit insular.

El mateix article 2 de PDS assenyala com a objectiu el de reduir tant com sigui possible, el transport de residus, però això no es pot traduir, com aquí s'ha fet, en la supressió

absoluta del possible transport. En la necessitat d'interpretar l'expressió "tant com sigui possible" ha d'entendre's que el que es tracta d'evitar, en la mesura que sigui possible, són els efectes mediambientals potencialment nocius i molestos del transport de residus, la qual cosa obliga a no generalitzar i modular el principi en funció dels residus que s'han de transportar. Concretament, si el trasllat i tractament dels RAEE fora de l'illa no comporta perjudici mediambiental o és mínim en comparació a un altre tipus de residus, l'aplicació del principi de proximitat, s'afebleix.

Pel que fa a la resta de controvèrsies, el Tribunal no les admet. Així, la resolució final de la sentència estableix:

- 1) Que ESTIMEM PARCIALMENT el present recurs contenciós administratiu.
- 2) DECLAREM disconforme amb l'ordenament jurídic els actes administratius impugnats i, en la seva conseqüència, els ANUL·LEM parcialment pel que fa a als punts 2 i 3 de l'Apartat CINQUÈ i en el punt 4 de l'Apartat SISÈ, de les autoritzacions impugnades, i es confirma en els restants extrems aquí exposats.

Els apartats anul·lats són els que pretenien impedir el trasllat de residus fora de la comunitat autònoma sense tenir la corresponent cobertura legal.

5. Sobre caducitat d'explotacions mineres (pedreres): les sentències del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears número 012/2015, de 27 de gener de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100016, núm. procediment 352/20007), i la número 66/2015, de 4 de febrer de 2015 (Id. Cendoj: 07040330012015100065, núm. procediment 428/2007)

L'objecte dels dos recursos és la Resolució de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern Balear de 14 de maig de 2007 que confirma la Resolució de 22 de desembre de 2006 del director general d'Indústria que va declarar la caducitat de la concessió directa d'explotació minera de l'anomenada Zona Sa Torre Nova situada dins del perímetre de la Concessió Directa d'Explotació de recursos de la Secció C) de la Llei de mines Sa Punta-Cas Canonge núm. 2255. En un cas el recurs és plantejat per un grup d'afectats i, en l'altre, per l'empresa que manifestava que tenia els drets d'explotació (Hijos de Miguel Mascaró, SA), que en el primer plet figurava com a codemandada.

Ambdues sentències porten a la mateixa conclusió: declarar conforme a dret la Resolució de 22 de desembre de 2006 que declarà la caducitat de la concessió directa d'exploració minera de la Zona Sa Torre Nova, situada dins del perímetre de la Concessió Directa d'exploració de recursos de la Secció C) de la Llei de mines Sa Punta —Cas Canonge núm. 2.255.

Sobre això, cal recordar que el Decret 61/1999, de 28 de maig, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de la CAIB, té per objecte regular el planejament, la gestió i la restauració de les pedreres en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de manera que ocasionin el menor impacte mediambiental possible. Entre les mesures que preveu per a aquest fi, està el de l'adaptació i la incorporació de les existents als paràmetres de l'indicat PDSC, de manera que les que no aconseguixin la incorporació, això comportarà la declaració de caducitat de la concessió o autorització minera.

El Tribunal considera que si una de les tres pedreres (Zona C "Sa torre Nova") no ha complert les exigències mediambientals i no s'ha incorporat al PDSC, la conseqüència és que ja no es podrà explotar perquè haurà esdevingut ineficaç, i el títol administratiu que permetria l'exploració haurà caducat. Per aquest motiu, pel no-compliment de les exigències ambientals, es declara la caducitat que ara es considera ajustada a dret.